



Sumilla: "(...) en estricta aplicación de los principios de legalidad y tipicidad, recogidos en los numerales 1 y 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, así como la normativa antes analizada, este Tribunal considera que carece de competencia para emitir pronunciamiento respecto a la supuesta responsabilidad administrativa del Contratista, al supuestamente haber contratado con el Estado pese a encontrarse impedido para ello (...)".

Lima, 23 de febrero de 2023.

VISTO en sesión de fecha 23 de febrero de 2023 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente № 456/2022.TCE, el procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Grupo La República Publicaciones S.A. por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello en el marco de la Orden de Servicio Nº 4568-2021-MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 14 de junio de 2021¹ el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en lo sucesivo la Entidad, emitió la Orden de Servicio Nº 4568-2021-MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES a favor de la empresa Grupo La República Publicaciones S.A. en adelante el Contratista, para "Contratar el servicio de publicación en medios impresos para la Dirección de Disponibilidad de Predios de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), orientada a publicaciones oficiales" por el importe de S/ 4,354.54 (cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro con 54/100 soles), en adelante la **Orden de Servicio**

Dicha contratación, si bien fue por un monto inferior a las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se efectuó durante la vigencia del el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF², en adelante **el TUO de la Ley** y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante, el Reglamento.

Notificada el 15 de junio de 2021, mediante correo electrónico.

Que recoge las modificatorias aprobadas mediante Decreto Legislativo N° 1341 y N° 1444.





Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución \mathcal{N}^{o} 1026 -2023-TCE-S5

2. A través del Memorando N° D000022-2022-OSCE-DGR³ del 13 de enero de 2022, presentado el 20 de enero de 2022 ante la Mesa de Partes Virtual del OSCE, la Dirección de Gestión de Riegos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE comunicó al Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, que el Contratista habría incurrido en infracción al contratar con el Estado encontrándose impedido para ello, conforme lo previsto en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.

A fin de sustentar su denuncia la Dirección de Gestión de Riegos del OSCE, adjuntó el Dictamen N° 192-2021/DGR-SIRE⁴ del 30 de diciembre de 2021, a través del cual señaló lo siguiente:

- De conformidad con la norma, la señora María Eugenia Mohme Seminario (madre) al ser familiar que ocupa el 1° grado de consanguinidad, con respecto de la señora Claudia Eugenia Cornejo Mohme, se encuentra impedida de participar en todo proceso de contratación, incluso, como integrante de los órganos de administración, apoderado o representante legal, mientras que esta última se encontraba ejerciendo el cargo de Ministra de Estado, siendo que, luego de dejar dicho cargo, el impedimento establecido para dicha autoridad subsiste hasta (12) meses después y solo en el ámbito de su sector.
- Se evidencia que la señora Claudia Eugenia Cornejo Mohme es una ex autoridad, debido a que desempeñó el cargo de Ministra de Estado desde el 19 de noviembre 2020 hasta el 28 de julio de 2021; según se grafica en el siguiente cuadro.

Año	Fecha	Cargo
2020-2021	19.NOV.2020 ⁶ – 28.JUL.2021 ⁷	Ministra de Comercio Exterior y Turismo

 Por consiguiente, la señora María Eugenia Mohme Seminario (madre), se encontraba impedida de contratar con el Estado a nivel nacional desde el 19 de noviembre 2020 hasta el 28 de julio de 2021; siendo que, el impedimento subsiste hasta doce (12) meses después de la fecha de cese de la señora Claudia Eugenia Cornejo Mohme en el cargo de Ministra de Estado, y solo en el ámbito de su sector.

Obrante a folio 2 del expediente administrativo sancionador.

⁴ Obrante a folio 3 al 12 del expediente administrativo sancionador en formato PDF





- De la revisión de la información obrante en el RNP, se advierte que la madre de la Ex Ministra María Eugenia Mohme Seminario, contaría con vinculación en las empresas GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. y GRUPO LA REPUBLICA S.A., por lo que, se procederá a verificar las contrataciones efectuadas por dichas empresas.
- En el presente caso, de la revisión de la Sección "Información del proveedor" del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el Contratista, cuenta con vigencia indeterminada en el RNP de Bienes y Servicios, desde el 18 de abril de 2016.
 - De otro lado, de la información registrada en el Buscador de Proveedores del Estado de CONOSCE, se aprecia que el Contratista tendría como accionista a la señora María Eugenia Mohme Seminario con el 11% de participaciones, quien además es integrante del órgano de administración.
- De la revisión de la Partida Registral 10 del Contratista, obtenida como resultado de la búsqueda efectuada en el portal web de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, se aprecia -entre otros- lo siguiente:
 - En el Asiento 36 (C00030), se indicó que por Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2019, se acordó designar a las personas que conforman el directorio de la sociedad para el periodo 2019 al 2020, encontrándose entre ellas, la señora María Eugenia Mohme Seminario.
 - En el Asiento 38 (C00032), se indicó que por Junta de fecha 3 de abril de 2020, se acordó nombrar a los miembros del Directorio para el periodo 2020-2021, siendo la señora María Eugenia Mohme Seminario, parte integrante del mismo.
- En ese sentido, considerando lo dispuesto en el artículo 11 del TUO de la Ley; y, en la medida que de acuerdo a la información declarada en el RNP -cuya actualización es de exclusiva responsabilidad de los proveedores- y aquella proporcionada de forma complementaria por el Contratista, tendría a la señora María Eugenia Mohme Seminario como integrante del directorio de la empresa, por lo tanto sería integrante del órgano de administración; y, en la medida que su hija Claudia Eugenia Cornejo Mohme venía ejerciendo el cargo de Ministra de Estado, dicha persona jurídica se encontraba impedida de





Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución \mathcal{N}^{o} 1026 -2023-TCE-S5

contratar con el Estado, en todo proceso de contratación a nivel nacional desde el 19 de noviembre de 2020 hasta el 28 de julio de 2021, y hasta doce (12) meses después de concluido, y solo en el ámbito de su sector.

- 3. Con Decreto del 1 de febrero de 2022, de forma previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita un Informe Técnico Legal, sobre las presuntas infracciones (contratar estando impedido y presentar información inexacta) en que habría incurrido el Contratista, remita copia del Pedido de Compra donde se aprecie que fue debidamente recibida (constancia de recepción), copia de documentación que acredite que el Contratista incurrió en la causal de impedimento; asimismo, señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos que supuestamente contendrían información inexacta, debiendo señalar si con la presentación de dichos documentos generó un perjuicio y/o daño a la Entidad.
- **4.** Por medio del Oficio № 0163-2022-MTC/10 presentado el 22 de febrero de 2022 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad remitió el Informe № 0241-2022-MTC/10.02, en el cual precisa lo siguiente:
 - Con fecha 14 de junio de 2021 se emitió la Orden de Servicio a favor del Contratista, para "Contratar un servicio de publicación en medios impresos para la Dirección de Disponibilidad de Predios de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), orientada a publicaciones oficiales."
 - Según Informe Nº 001-2022-MTC/MJPC Según Informe Nº 001-2022-MTC/MJPC la Oficina de Abastecimiento señaló que la contratación se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Directiva Nº 003-2021-MTC/10 Directiva para la contratación de bienes, servicios y/o consultorías por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias; por lo que la documentación e información presentada por la Contratista se presume veraz.
 - La Contratista tendría a la señora María Eugenia Mohme Seminario como integrante de directorio, por lo tanto sería integrante del órgano de administración; y, estando que su hija Claudia Eugenia Cornejo Mohme venía ejerciendo el cargo de Ministra de Estado, dicha persona jurídica se encontraba impedida de contratar con el Estado, en todo proceso de contratación a nivel nacional desde el 19 de noviembre de 2020 hasta el 28





de julio de 2021, y hasta doce (12) meses después de concluido, y solo en el ámbito de su sector.

- El daño causado se constituye al haber contratado con un proveedor que no se encontraba habilitado para ello.
- Adjunta copia de la Orden de Servicio.
- 5. Por medio del Oficio № 076-2022-MTC/06 presentado el 18 de marzo de 2022, el Órgano de Control Institucional de la Entidad informó que realizó las gestiones para el cumplimiento del requerimiento de información formulado con decreto del 1 de febrero del mismo año.
- 6. Con Decreto del 21 de marzo de 2022, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal b) en concordancia a los literales h) y k) del numeral 11.1. del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, en el marco del Pedido de Compra, hecho tipificado en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225.

Asimismo, notificar al Contratista para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

- **7.** Con Decreto 21 de marzo de 2022, se tuvo por cumplido el requerimiento formulado al Órgano de Control Institucional de la Entidad.
- **8.** Mediante Decreto del 22 de marzo de 2022, se tuvo por notificado al Contratista el decreto de inicio, a través de la Casilla Electrónica del OSCE.
- 9. A través del Oficio № 0297-2022-MTC/10 presentado el 31 de marzo de 2022 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad remitió el Informe № 0540-2022-MTC/10.02, en el cual precisa lo siguiente:
 - De la revisión de la cotización presentada por la Contratista únicamente se advierte el formato de cotización, por lo que no es posible determinar si presentó información inexacta.





- Adjunta la Orden de Servicio y la cotización presentada por la Contratista.
- 10. Mediante escrito s/n del 5 de abril de 2022, presentado ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, bajo los siguientes argumentos:
 - Señala que su representada, durante el año 2021 era el diario judicial en el distrito judicial de Tumbes, Piura, Cajamarca (dejó de serlo en el 2022), Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua; y que "(...) las órdenes que figuran en el anexo 1, del Dictamen N° 192-2021/DGR-SIRE, obedecen a dicha condición legal de nuestro diario, de conformidad con el inciso 2 del artículo 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, que dispone que los Decretos de Alcaldía, deben publicarse "en el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones". (sic)
 - Refiere que, el servicio brindado a la Entidad no corresponde a una publicidad comercial, sino de publicación de resoluciones, comunicados, avisos de orden público, convocatorias, edictos, notificaciones, en todos los casos dentro de un formato pre establecido por la norma específica que dispone su publicación.
 - Niega que, la señora Ministra [hija de la señora María Eugenia Mohme, miembro de su Directorio], haya intervenido en la contratación del servicio de publicación; al tratarse de una institución autónoma e independiente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
 - Precisa que, "(...) La Sra. María Eugenia Mohme, madre de la Sra. Claudia Cornejo y -en el periodo cuestionado- directora de nuestra empresa NO es cónyuge, conviviente o pariente cercana del presidente de la República (actual ni del presidente del momento de la contratación) (...)" (sic)
 - Finalmente, indica que el Tribunal Constitucional dispuso que el OSCE no incurra en los actos de amenaza de violación que motivaron la demanda de amparo, debido a que la aplicación del impedimento de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas naturales como los congresistas, para contratar con el Estado, vulnera el derecho a la libertad de contratar.





Tríbunal de Contrataciones del Estado Resolución \mathcal{N}^{o} 1026 -2023-TCE-S5

- Solicitó el uso de la palabra.
- 11. Con Decreto del 20 de octubre de 2022, se dejó sin efecto el decreto del 21 de marzo de 2022, y se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, de acuerdo a lo previsto en el literal k) en concordancia a los literales b) y h) del numeral 11.1. del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, en el marco del Pedido de Compra, hecho tipificado en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225.

Asimismo, notificar al Contratista para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

- **12.** Con escrito s/n del 10 de noviembre de 2022, presentado ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Contratista señaló lo siguiente:
 - Reiteró los argumentos formulados en su primer escrito de descargos.
 - Solicitó se considere el criterio adoptado en el pronunciamiento de la Resolución Nº 0125-2021-TCE-S3.
 - Invocó el principio de legalidad, acotando que el Tribunal carece de competencia para emitir pronunciamiento respecto de la presunta responsabilidad, aludiendo a la Resolución № 3690 - 2022-TCE-S5.
- 13. Con Decreto del 23 de noviembre de 2022, se tuvo por apersonado al Contratista y por presentado sus descargos, dejándose a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra, asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala para que resuelva; siendo recibido el mismo día.
- **14.** Con Decreto del 20 de enero de 2023, se programó audiencia pública para el día 26 del mismo mes y año, la misma que se llevó a cabo con la participación del representante del Contratista.
- **15.** Por medio del Decreto del 15 de febrero de 2023, a fin de contar con mayores elementos de convicción, este Colegiado requirió a la Entidad lo siguiente:

"(...)

 Sírvase remitir copia legible y completa de la Orden de Servicio № 4568-2021-MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES emitida a favor de





la empresa Grupo La Republica Publicaciones S.A.; la cual deberá contar con constancia de recepción por parte de la referida empresa. En caso la notificación se haya realizado vía medio electrónico, remitir la constancia de recepción del mismo.

- Sírvase emitir pronunciamiento sobre si la emisión de la Orden de Servicio Nº 4568-2021-MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES corresponde a un mandato legal específico, debiendo sustentar ello de manera clara y expresa. Para tal efecto deberá citarse la normativa específica y las razones por las que se determinó como contratista a la empresa Grupo La Republica Publicaciones S.A.; de ser afirmativa la respuesta remitir copia legible de dicho dispositivo legal.
- Sírvase remitir el expediente de contratación completo y legible, en el cual se aprecie las actuaciones preparatorias realizadas para la contratación Orden de Servicio № 4568-2021-MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES; en caso de existir un contrato primigenio, deberá remitirse la documentación completa correspondiente a dicha contratación. (...)" (sic)
- 16. Con Oficio № 0264-2023-MTC/10.02 del 17 de febrero de 2023, y presentado el 20 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad informó que la orden de Servicio se efectuó en cumplimiento al mandato legal establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, que aprueba el "Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura" y remitió la siguiente documentación:
 - Orden de Servicio.
 - Correo electrónico del 15 de junio de 2021 mediante el cual notifica al Contratista, la Orden de Servicio.
 - Comprobante de Pago N° 12423-2021, mediante el cual se acredita el pago de la Orden de Servicio.
 - Acta de Conformidad del Servicio N° 07712-2021.
 - Factura Electrónica F001-0054195.





Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución \mathcal{N}^{o} 1026 -2023-TCE-S5

II. FUNDAMENTACIÓN:

Normativa aplicable.

 A efectos de evaluar la configuración de la infracción imputada, es preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, para determinar si el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa por haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley.

<u>Cuestión Previa</u>: Sobre la competencia del Tribunal para determinar responsabilidad administrativa.

- 2. De manera previa al análisis de fondo de la controversia materia del presente expediente, este Tribunal considera pertinente verificar si la contratación efectuada mediante la Orden de Servicio es un supuesto de inaplicación de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante Ley N° 30225, y, en consecuencia, determinar si el Tribunal es competente para conocer el caso materia de autos, teniendo en cuenta que ello constituye uno de los argumentos alegados por el Contratista en su escrito de descargos y en la audiencia pública.
- **3.** Sobre el particular, cabe precisar que el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley N° 30225, establece lo siguiente:

"Artículo 3. Ámbito de aplicación

(...)

3.3. La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, así como a otras organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos.

(...)."

- **4.** De otra parte, cabe precisar que, los artículos 4 y 5 de la Ley N° 30225 contemplan los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa.
- **5.** Al respecto, a fin de delimitar el alcance de los citados artículos, corresponde traer a colación el numeral 2.2 de la Exposición de Motivos de su anteproyecto [Ley N° 3626- 213-PE], en el cual señala lo siguiente:





"(...)

2.2 AMBITO AL QUE SE APLICA LA LEY

(...

El proyecto también reconoce, al igual que el régimen actual, la existencia de supuestos de contratación o relaciones jurídicas que no se encuentran sujetos al ámbito de aplicación de la Ley. No obstante, considerando que la actual normativa, sin mucha claridad, hace referencia a dicho listado como supuestos de inaplicación, se ha optado por establecer dos listados, los que se denominan genéricamente como "supuestos excluidos del ámbito de aplicación" y "supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión" a fin de facilitar su comprensión e identificación, distinguiéndose los casos en los que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) podrá intervenir a través de la supervisión. Para este último listado, se prevé además que en el Reglamento se precisen los aspectos y requisitos aplicables a su configuración y en la Directiva correspondiente los criterios bajo los cuales se efectuará dicha supervisión.

Para la definición de los listados de contrataciones o relaciones jurídicas excluidas, se ha tomado en cuenta la necesidad de evitar el exceso de regulación, por lo que el proyecto no considera algunos de los supuestos que actualmente se encuentran contemplados en el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo № 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

(...)

Resulta importante mencionar que la opción de retirar o no considerar los supuestos antes indicados, en ningún caso, debe entenderse como el retorno de los mismos el ámbito de aplicación de Ley de Contrataciones del Estado, ya que como se ha indicado la mayoría de los supuestos se encuentran regulados por normas específicas.

(...)." (Resaltado es agregado)

- **6.** Nótese que, el numeral 2.2 de la exposición de motivos de la Ley N° 30225, reconoce que existen supuestos de contratación o relaciones jurídicas que no se encuentran sujetos al ámbito de aplicación de la citada ley, por lo que, se optó por establecer dos listados, los que se denominan genéricamente como "supuestos excluidos del ámbito de aplicación" y "supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión" (artículo 4 y 5 de la Ley N° 30225); no obstante, cabe resaltar que, no todos los supuestos de inaplicación de la Ley N° 30225 se encuentran positivizados o expresamente regulados.
- 7. En este punto, cabe precisar que las adquisiciones de bienes, servicios y obras que realiza el Estado tienen un régimen general regulado por la Ley [Ley de Contrataciones del Estado], lo que no excluye que existan otras normas que

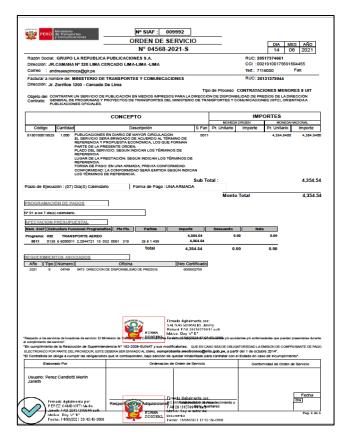




regulen mecanismos de contratación distintos y que se encuentren fuera del ámbito de aplicación de la Ley.

En esa medida, debe tenerse en cuenta que la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, no extiende el ámbito de competencia del Tribunal de Contrataciones del Estado respecto de conductas ocurridas en el marco de contrataciones que son ajenas a la Ley de Contrataciones del Estado; por ello, para que este Tribunal ejerza potestad sancionadora en dichas situaciones, debe contarse con norma expresa con rango de ley que le atribuya tal competencia.

8. Ahora bien, en el presente caso, de la revisión de la documentación remitida por la Entidad con Oficio Nº 0297-2022-MTC/10 y Oficio Nº 0264-2023-MTC/10.02, se advierte que, mediante la Orden de Servicio, la Entidad contrató con el Contratista el servicio de "Publicación en medios impresos para la Dirección de Disponibilidad de Predios de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), orientada a publicaciones oficiales" tal como se aprecia a continuación:



Página 11 de 18





- 9. Asimismo, la Entidad en virtud del requerimiento formulado por este Colegiado a través del decreto del 15 de febrero de 2023, por medio del referido Oficio Nº 0264-2023-MTC/10.02 precisó que "la Orden de Servicio Nº 4568-2021-S, se realizó en cumplimiento al mandato legal establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, que aprueba el "Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura".
- 10. Es así que, según lo señalado por la Entidad, la contratación efectuada mediante la Orden de Servicio se realizó en atención a la mencionada Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, la cual precisa lo siguiente:

Tercera.- Reconocimiento de Mejoras

El Sujeto Activo, a fin de obtener la liberación del inmueble, en el marco de los procesos regulados en los títulos III, IV y VI, previa disponibilidad presupuestal respectiva, podrá reconocer las mejoras encontradas en el inmueble y reconocer los gastos de traslado a los ocupantes o poseedores que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 del presente Decreto Legislativo.

Para que procedan los pagos anteriores, el Sujeto Activo publicará un aviso por dos veces con intervalos de tres días calendario en el diario oficial El Peruano y en un diario de circulación nacional con la siguiente información:

- 11. De lo informado por la Entidad se advierte que la contratación del Contratista se llevó a cabo en estricta observancia de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, que aprueba el "Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura", por lo que nos encontraríamos ante un supuesto de inaplicación de la Ley N° 30225.
- **12.** Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA establece lo siguiente:

"Artículo 1. Objetivo:

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a los procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la





ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú.

Es de interés público primordial la Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura"

Asimismo, en su artículo 2 detalla el ámbito de aplicación de dicho decreto supremo, precisando lo siguiente:

"Artículo 2.- Entidades bajo el ámbito de aplicación:

El presente Decreto Legislativo es de aplicación para todas las entidades del sector público en todos los niveles de gobierno, personas naturales o personas jurídicas."

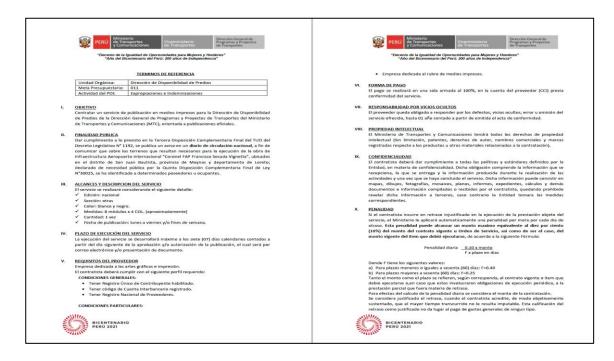
Cabe precisa que el artículo 4 del citado Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA precisa que para efectos de dicho dispositivo legal, se entenderá como Sujeto Activo, al "Ministerio competente del sector, el Gobierno Regional y el Gobierno Local responsable de la tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación".

- 13. Como se puede apreciar, el Ministerio competente del sector [la Entidad para el caso en concreto] es el responsable de la tramitación de los procesos de adquisición o expropiación de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, que aprueba el "Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura" al encontrarse dentro de su ámbito de aplicación.
- 14. En otras palabras, esta Sala aprecia que los citados artículos contemplan un mandato legal específico para el Ministerio competente del sector responsable de la tramitación de los procesos de adquisición o expropiación, el cual debe determinar en qué diario (de circulación nacional) efectuará la publicación correspondiente.
- 15. Aunado a ello, es preciso destacar que de la documentación remitida por la Entidad se aprecian los Términos de Referencia del servicio contratado, en cuyo acápite de finalidad pública, refiere que aquel fue requerido para "Dar cumplimiento a lo previsto en la Tercera Disposición Complementaria Final del TUO del Decreto Legislativo N° 1192, se publica un aviso en un diario de circulación nacional, a fin de comunicar que sobre los terrenos que resultan





necesarios para la ejecución de la obra de Infraestructura Aeropuerto Internacional "Coronel FAP Francisco Secada Vignetta", ubicados en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas y departamento de Loreto; declarado de necesidad pública por la Quinta Disposición Complementaria Final de Ley N°30025, se ha identificado a determinados poseedores u ocupantes"; tal como se aprecia de la siguiente reproducción:









- 16. Es así que, en principio, la entidad contratante no pueda aplicar alguno de los métodos o procedimientos de contratación contemplados en la normativa de contratación pública (Ley N° 30225 y su Reglamento), toda vez que el objeto de la contratación es específico y condiciona la contratación, por mandato normativo, a un tipo de proveedor en particular (diario de circulación nacional).
 - Suponer lo contrario implicaría, como mínimo, la afectación de los principios de libertad de concurrencia y de igualdad de trato, los cuales proscriben la adopción de prácticas que limiten la concurrencia de participantes, así como procura que "todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas", respectivamente.
- 17. En este punto, cabe anotar que, esta Sala aprecia que la Orden de Servicio cuenta con una naturaleza jurídica diferente a las contrataciones de otro tipo de publicaciones, pues no obedece a alguna estrategia de publicidad, sino que deriva de una disposición normativa. Ello, como mínimo, implica una situación en la que la Entidad, a diferencia de otras contrataciones, encuentra su actuación limitada a una disposición normativa, resultando la finalidad de la contratación una que tiene





por objeto cumplir una obligación legal de publicidad, en este caso, referida a la liberación de inmuebles.

- 18. En ese sentido, en el presente caso, la Orden de Servicio comprende la contratación de un servicio que constituye un supuesto de inaplicación de la Ley N° 30225, pues, como ya se ha indicado, el servicio deriva del mandato específico para la Entidad, previsto en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, que aprueba el "Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura", el cual prevé que "(...) El Sujeto Activo, a fin de obtener la liberación del inmueble, en el marco de los procesos regulados en los títulos III, IV y IV, previa disponibilidad presupuestal respectiva, podrá reconocer las mejoras encontradas en el inmueble y reconocer los gastos de traslado a los ocupantes o poseedores que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 del presente Decreto Legislativo. Para que procedan los pagos anteriores, el Sujeto Activo publicará un aviso por dos veces con intervalo de tres días calendario en el diario oficial El Peruano y en un diario de circulación nacional (...)" supuesto que, si bien no está regulado de forma taxativa en los artículos 4 o 5 de la Ley N° 30225, tampoco implica que se deba de subsumir dentro de la aplicación de la citada ley; por cuanto, en atención a una interpretación histórica de la normativa, tal como lo ha señalado la exposición de motivos de la Ley N° 30225, existen supuestos que se encuentran regulados por normas específicas.
- 19. En esa medida, debe tenerse en cuenta que la Ley N° 30225, no extiende el ámbito de competencia del Tribunal de Contrataciones del Estado respecto de conductas ocurridas en el marco de contrataciones que son ajenas a la Ley de Contrataciones del Estado; por ello, para que este Tribunal ejerza potestad sancionadora en dichas situaciones, debe contarse con norma expresa con rango de ley que le atribuya tal competencia.
- **20.** Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso indicar que el ejercicio de la potestad sancionadora de este Tribunal se da con sujeción a los principios de legalidad y de tipicidad, recogidos en los numerales 1 y 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Según el principio de legalidad, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un





Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución \mathcal{N}^{o} 1026 -2023-TCE-S5

administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

Por otra parte, el principio de tipicidad prescribe que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

- 21. En tal contexto, en estricta aplicación de los principios de legalidad y tipicidad, recogidos en los numerales 1 y 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, así como la normativa antes analizada, este Tribunal considera que carece de competencia para emitir pronunciamiento respecto a la supuesta responsabilidad administrativa del Contratista, al supuestamente haber contratado con el Estado pese a encontrarse impedido para ello; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley Nº 30225 [Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF].
- **22.** Por lo tanto, corresponde que se declare que este Tribunal no cuenta con competencia para conocer el presente procedimiento administrativo sancionador, careciendo de objeto el análisis de los descargos presentados en tanto no se emitirá pronunciamiento sobre el fondo.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Steven Aníbal Flores Olivera y la intervención de los Vocales Danny William Ramos Cabezudo y Christian César Chocano Davis, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución № D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de mayo de 2022, publicada el 23 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley № 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo № 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo № 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;





LA SALA RESUELVE:

- Declarar que el Tribunal de Contrataciones del Estado carece de competencia para determinar la responsabilidad administrativa de la empresa GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. (con R.U.C. N° 20517374661), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado pese a encontrarse impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio № 4568-2021-MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; en consecuencia, carece de objeto emitir pronunciamiento, por los fundamentos expuestos.
- 2. Disponer el archivo definitivo del presente expediente.

Registrese, comuniquese y publiquese.

STEVEN ANIBAL FLORES OLIVERA
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS VOCAL DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

DANNY RAMOS CABEZUDO
PRESIDENTE
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

SS.

Ramos Cabezudo. **Flores Olivera.** Chocano Davis.